

Editorial

EL GOBIERNO LA PUDO EVITAR

La muerte de los once diputados del Valle del Cauca ha dado de qué hablar y desde distintas orillas se está manejando el fatal suceso. El gobierno y sus seguidores buscan beneficios políticos a costa del dolor ajeno, antes que reflexionar sobre las causas que generaron estos hechos y enfocar soluciones reales a las mismas.

Algunos medios de información, especulando sobre los autores del ataque al campamento de las FARC, donde estaban retenidos los diputados, señalaron al ELN de haberlo hecho, valoración que desmentimos categóricamente y exigimos se actué con más responsabilidad y realismo y menos especulaciones para no hacer más daño a la verdad y confundir a la opinión.

La responsabilidad mayor recae sobre el gobierno de Uribe Vélez empeñado en mostrar resultados de su política de "Seguridad Democrática", tratando de rescatar los retenidos por la vía militar y empeñado en doblegar a la guerrilla, antes que disponerse a llegar al acuerdo humanitario que habilite el canje de retenidos por presos políticos.

El acuerdo humanitario propuesto por las FARC y que reclama el país, está contemplado en el Derecho Internacional Humanitario y concretamente en los Acuerdos de Ginebra, suscritos por el gobierno y aprobados por ley de la República. Si el gobierno hubiese flexibilizado su posición para avanzar en el acuerdo, otra hubiera sido la suerte de los once diputados y el dolor de sus familias se hubiese convertido en la alegría del regreso.

En las movilizaciones del 5 de julio, promovidas desde las esferas gubernamentales y los medios de información, se expresaron dos posiciones que reflejan dos maneras de ver los hechos y concebir la solución a las retenciones y al conflicto social y armado.

Quienes reclaman el "acuerdo humanitario" para la liberación de personas retenidas por la insurgencia y los presos políticos en las cárceles del régimen, defienden la solución política para resolver el conflicto social y armado que vive Colombia desde la década del 40 del siglo pasado.

Y otra, la liderada por el Presidente empeñado en negar la existencia del conflicto interno y quien carece de una estrategia realista para construir la paz, y aprovecha el luctuoso suceso para sobredimensionar la solución militar al conflicto y arrastrar la opinión nacional a respaldar su política errónea de "seguridad democrática".

La advertencia que hizo Uribe a la guerrilla en el discurso que pronunció en el municipio de Chaparral (Tolima), sobre la muerte de los diputados, es ilustrativa: "se desmovilizan o los aniquilamos". También hay que entender esta provocación como otra manera de tender un velo y escurrirse de la responsabilidad del rescate militar y los obstáculos interpuestos para avanzar hacia el "acuerdo humanitario" que pudo evitar la muerte de los diputados.

Estos hechos dolorosos, como muchos otros que suceden en el país diariamente, son expresión de la existencia del conflicto social y armado que acarrea graves problemas cuya superación está dependiendo de que se resuelva éste y se recree la paz estable y duradera.

La movilización del 5 de julio es importante pues es síntoma del despertar del país de la indiferencia frente al conflicto. No obstante es necesario registrar el oportunismo del gobierno al pretender canalizar la protesta a su favor y también cómo los medios informativos no han tenido la misma diligencia para convocar al rechazo de las innumerables masacres de campesinos, asesinatos de sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos perpetrados por la fuerza pública y los paramilitares.

Las guerrillas no son responsables de este conflicto de más de seis décadas, como lo difunden la propaganda oficial y los medios de información para ilegitimarlas, sino que son producto y resultado de dicho conflicto.

La oligarquía es quien ha hecho de la violencia y la corrupción la forma de estar en el poder. En todos los tiempos ha recurrido a la creación de grupos de justicia privada como parte integral la estructura terrorista del Estado, que junto a la fuerza pública defienden sus intereses de clase y mantienen la opresión sobre el pueblo, como se ratifica en los tiempos más recientes con el narcoparamilitarismo y la tenebrosa guerra sucia que se propuso destruir el movimiento sindical, eliminó a miles de líderes sociales y tiene en las cárceles, desaparecidos o desterrados, a cientos de miles de luchadores populares y defensores de los Derechos Humanos.

Ya es tiempo que los mayores esfuerzos de la sociedad se encaminen a encontrar la salida política a este conflicto que tiene raíces históricas y causas políticas, económicas y sociales y que no es un problema de terrorismo, como simplistamente el Presidente lo pregona como muletilla, entrando en contradicción con la Corte Suprema de Justicia que lo acaba de plantear de manera concreta para referirse a las obligaciones del Estado con sus víctimas.

Coyuntura Nacional

DIALOGOS ENTRE INCERTIDUMBRES Y EXPECTATIVAS

Los diálogos que el ELN adelanta con el gobierno colombiano en Cuba, generan distintas opiniones y expectativas sobre los resultados.

El conflicto interno colombiano tiene mucha complejidad, por sus raíces históricas profundas, por las causas políticas, económicas y sociales que lo

generan, por la diversidad de componentes y de manera especial por el fenómeno de la corrupción de la clase en el poder y del narcotráfico, integrado este último a la estrategia contrainsurgente del Estado desde la década del ochenta del siglo anterior, bajo la modalidad de narcoparamilitarismo.

La estructura terrorista del Estado y el narcoparamilitarismo son dos puntales del poder oligárquico que están en plena vigencia y no se ve por parte alguna la decisión real del régimen en cuanto a desmontar esta estructura de muerte contra la oposición política y social y parar la guerra sucia.

El ELN está decidido a contribuir en la superación del conflicto pero no es tarea fácil, ni un problema de voluntad política. Se trata de crear condiciones reales y ganar las mayorías de la nación para superar los grandes males que nos aquejan y abrir el camino que conduzca a la paz estable y duradera, construyendo un proceso que afronte los cambios que el país necesita.

El ELN considera que es posible la salida política al conflicto en base a un gran consenso nacional, una política de Estado favorable para la paz y la participación de la sociedad en dicho proceso.

Desde este enfoque es que concebimos los diálogos que hemos adelantado en los últimos 19 meses con el gobierno de Uribe Vélez.

La falta de resultados es debido a que estamos en orillas distintas y el punto de partida para las dos partes no es el mismo.

Mientras que para el gobierno no existe conflicto social y armado sino grupos terroristas y la paz es igual a pacificación, desmovilización y desarme de las guerrillas para que el país siga igual, para el ELN la paz implica partir de reconocer la existencia del conflicto y abordar un proceso hacia las transformaciones, que conduzca a superar las causas originarias que alimentan el conflicto interno actual.

Aquí está el centro del atasco de las conversaciones con el gobierno y la incertidumbre sobre los resultados.

Los diálogos se iniciaron con una fase exploratoria para conocer las propuestas y la disposición para avanzar en ellas. Luego de sobrepasar escollos, se pasó a la segunda fase que tiene el propósito de generar un ambiente de paz y suscribir un Acuerdo Base, referido a cuatro temas: derechos humanos, derechos políticos y democracia, vinculación de la sociedad al proceso de construcción de la paz y apoyo de la comunidad internacional.

Otros temas sobre la situación del país y problemas a resolver serían materia de las siguientes fases.

El ELN tiene la disposición de firmar, como aporte al ambiente de paz, un acuerdo de cese al fuego y hostilidades con verificación, por un tiempo determinado, experimental y bilateral. Pero a la vez exige que el gobierno haga igualmente aportes para generar ambiente de paz con medidas reales frente al desplazamiento, medidas que neutralicen la persecución a opositores políticos y dirigentes sociales, medidas que lleven un alivio frente al problema de la

desaparición forzada - el último registro da cuenta de treinta mil colombianos desaparecidos - medidas frente a las detenciones masivas.

La discusión está centrada en el cese al fuego y hostilidades y la verificación, principalmente. Los otros temas de esta fase están en titulares y muy poco se ha avanzado.

En la mesa el ELN ha planteado con claridad que ni se desmoviliza, ni se desarma, ni se localiza, en respuesta a las exigencias del gobierno.

Otro atranque está en que el gobierno busca bajarle perfil a lo bilateral sobre todo en el tema de las hostilidades, pues plantea que él no hace hostilidades contra la sociedad.

La verificación es otro punto polémico. El gobierno busca sacar ventajas en este asunto que el ELN considera que debe ser producto de un acuerdo, donde se diseñen conjuntamente los mecanismos que permitan constatar la violación de lo acordado.

Dentro de este ambiente de dificultades se ha terminado la séptima ronda de conversaciones. Las expectativas mayores están centradas en la posibilidad de firmar el Acuerdo Base que genere un alivio humanitario a la sociedad.

Entre las partes continúa la desconfianza. El ELN considera que el gobierno no tiene disposición para concretar un acuerdo donde el principal beneficiado sea el país. Las declaraciones que dio el Presidente Uribe en el municipio de Chaparral, (Tolima), cuando refiriéndose a las guerrillas advirtió: "o se desmovilizan o las aniquilamos", reflejan con toda claridad que su política es de guerra y no de paz como lo reclaman los colombianos.

La pretensión de la desmovilización y el desarme de la insurgencia como tradicionalmente han exigido los gobiernos y la clase en el poder, es una manera simplista de abordar la solución del conflicto social y armado y el ELN descarta de plano dicha fórmula.

Coyuntura Nacional

PARAPOLITICA Y ELECCIONES

La coyuntura colombiana vive hoy una tensión que permanecerá por los tres meses siguientes, donde está al centro la contienda electoral y la llamada "parapolítica"

A pesar que esta tensión afecta a la clase gobernante, en el ambiente se respira la fuerza del terrorismo de Estado que aturde y no permite la necesaria libertad para ejercer la lucha desde los espacios amplios e institucionales.

Los hechos de terrorismo producidos por las fuerzas legales e ilegales del régimen, se hacen presentes con asesinatos de líderes políticos de izquierda, dirigentes comunitarios o sencillamente luchadores por los Derechos Humanos.

En el mismo sentido, mientras se acercan la elecciones de octubre circulan amenazas a quienes no comulgan con las políticas gubernamentales y como antesala se siente el tufillo terrorista de la interceptación telefónica a diestra y siniestra, por la que solo fueron señalados un par de autores materiales y que se resolvió por lo alto, porque los críticos en el poder no pueden afectar la institucionalidad representada -en este caso- por el ministro de defensa y otra vez la impunidad se enseñoorea en la vida política del país.

La fuerza y presencia real hoy en Colombia del movimiento político democrático, representado en su más clara expresión en el Polo Democrático Alternativo, se enfrentará en la contienda electoral con una aceitada maquinaria clientelista que toma ribetes de organicidad y cuyos jefes son "varones" o caciques electorales que en cada evento de este tipo se reparten a nombre de los dos partidos tradicionales en departamentos, municipios y corregimientos.

Esta maquinaria clientelista representa además una poderosa bolsa de empleos y repartos burocráticos como práctica inherente a la vida política del país.

Pero ello aún no refleja toda la realidad. Veamos.

Las campañas electorales incluyen espacios para numerosos contratos que se asignarán a las corrientes de los dos partidos tradicionales, según los ganadores, y cuyo botín es siempre el presupuesto nacional.

En oportunidades no hay necesidad de definir por cuál partido se vota, lo importante es votar por cualquier "varón" electoral que represente cualquier corriente de la clase gobernante y de esa manera se asegurará el empleo, el contrato o el cargo público a que se aspira.

Hasta acá hemos mencionado el aparato clientelista legal. El otro es el ilegal, donde los señores narcoparamilitares son también varios "varones" o caciques representantes de las regiones.

Antes todo el mundo sabía quiénes eran, pero desde la justicia no se actuaba. Con el proceso que el gobierno Uribe desarrolló para legalizar el aparato clandestino de los narcoparamilitares y presentarse así como el adalid de la institucionalidad, le ha saltado la liebre por aquello de que todo es tan evidente, que no se podía esconder y conocemos así unos cuántos dueños de empresas, alcaldes, gobernadores, congresistas, oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros y hasta el mismo presidente, en un sentido u otro, aparecen involucrados en la llamada parapolítica.

Pero esta evidencia de hasta dónde han llegado los tentáculos narcoparapolíticos, no significa que el control electoral en las regiones haya cedido, pues la política en Colombia es representada por clanes, familiares o políticos, que representan la tradición de la clase gobernante y si un personaje no puede ser representante hoy por cuenta de las investigaciones, su reemplazo está garantizado y en nada afectará la fuerza de los partidos de los que se valen para mantenerse atornillados al poder.

Esta fuerza narcoparamilitar, enquistada en las regiones y construida bajo el terror solapado en unas oportunidades y abierto en otras, hace parte de las

políticas del Estado y no son nuevas. Los viejos analistas lo saben desde hace muchos años, solo que ahora ese conocimiento sale con fuerza a la luz pública para extender su eco al exterior, por lo que anda en aprietos el Presidente de la "seguridad democrática". ¡Qué seguridad y qué democracia!

Coyuntura Internacional

VENEZUELA Y EL PODER POPULAR

En Venezuela, que había sido ejemplo en la región de "democracia" neoliberal para América Latina, se evidenció otra realidad desde el 27 de febrero de 1989.

Un pueblo excluido se levantó para dejar claro que la supuesta democracia venezolana no era más que un espejismo capitalista. Ese día representó un punto de quiebre en el imaginario venezolano. El pueblo salió a la calle para no volver a entrar más, desencadenando un proceso de debates, discusión y organización, que aunado a los esfuerzos militares insurrectos de 1992, se perfiló como los años de construcción de lo que hoy llamamos la Revolución Bolivariana.

Luego del triunfo del coronel Hugo Chávez en el año 98, entró en un proceso constituyente que dio como resultado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy vigente.

El Presidente Hugo Chávez ha propuesto realizar una nueva reforma constitucional, mediante el proceso a nivel asambleario que se vive.

No obstante, también ha existido un proceso constituyente a nivel popular que se ha construido en el fragor de las luchas cotidianas y de las construcciones políticas populares que cuenta con el alentador apoyo del discurso presidencial.

Las misiones sociales del Estado (Barrio adentro, Ribas, Sucre, Mercal, etc.) han sido reapropiadas en distintos espacios por los sectores organizados. Sin embargo, las tensiones existentes entre el Estado y el movimiento popular son una constante presente en el proceso venezolano.

El tema de la propiedad privada, los múltiples embates de la derecha en el país, las mismas corrientes reaccionarias que existen al interior de las instituciones privadas y del Estado, dan cuenta de las fortalezas y debilidades que se tienen.

En este sentido, las prácticas emancipatorias se encuentran enmarcadas en esa relación Estado-movimiento social, con organizaciones que han logrado niveles de autonomía y organización, tales como la indígena por su autodeterminación, vivendistas que toman espacios urbanos, juventudes barriales por una nueva cultura, obreros que toman fábricas y organizaciones políticas que comparten junto al pueblo la previsión organizativa, cultural, económica y militar ante los posibles embates del imperio.

Estas expresiones, que defienden y apoyan el proceso liderado por el presidente Hugo Chávez, son a su vez avivados y apoyados en su organización por la política gubernamental y han construido movimiento propio, con miras a la emancipación y con intereses populares claramente marcados.

Se debe destacar que el proceso venezolano abrió y sigue abriendo las posibilidades de discusión y de construcción de apuestas revolucionarias que parecían negadas en América Latina.

La vía electoral como posibilidad de inicio de un cambio revolucionario, la construcción integradora de un frente único latinoamericano que tenga como fundamentos la solidaridad, la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos, la confrontación directa hacia las políticas intervencionistas de los EE.UU. y la reedición de un socialismo posible, han sido elementos que han configurado nuevas posibilidades en el continente y en el mundo.

Es posible asegurar que el discurso contrahegemónico que produce Venezuela, explora fuera de sus fronteras y logra significativas expresiones de adhesión, de los demás pueblos, hacia una propuesta de integración indo-afro-americana, bajo presupuestos socialistas.

Últimamente se ha reavivado el movimiento opositor de derecha con el apoyo resonante de las estructuras mediáticas pro-imperialistas, a raíz del fin de la concesión del canal 2 de televisión, RCTV. Están empeñados una vez más en intentar deslegitimar y derrocar al gobierno de Chávez.

El nuevo status quo venezolano, fraguado en los últimos 8 años, ha logrado una estabilidad tal que no se prevén mayores incidencias ni consecuencias críticas venidas del mencionado movimiento.

En la vida política, sin embargo, aún en la misma construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, se expresa la pugna histórica de las viejas prácticas clientelistas y de formación de grupos de presión por intereses sectoriales. Éstas prácticas se enfrentan a un nuevo modelo de participación con profundidad democrática que coadyuva a la construcción del poder popular y constituyente.

Venezuela avanza en esa dirección: fluye desde abajo y construye los instrumentos para la conducción estratégica colectiva.

Con enemigos poderosos dentro y fuera de su frontera el proceso bolivariano se fortalece y avanza en la vanguardia latinoamericana en la búsqueda y construcción de las transformaciones necesarias para lograr la justicia social y la verdadera democracia.